

**A 28 años del golpe las instituciones funcionan para los poderosos (\*)**  
**FPMR. Septiembre 2001.**

*8 páginas.*

---

Hace algunos meses, a propósito de los avances que hasta ese entonces tenía el intento de enjuiciar a Pinochet, Ricardo Lagos acuñó otra de sus frases para el bronce con la que aparentemente pretendía aquietar los ánimos de la derecha y el poder militar, y es que en Chile “las instituciones funcionan”, lo cual había que respetar y acatar. Al ser sobreesido el tirano por motivos de salud (tal como lo previmos hace mucho tiempo), confirmamos que esta consigna encubre el objetivo estratégico de preservar la estabilidad institucional (terminar la transición) y el modelo económico que tanto beneficia a nuestra burguesía. En esta coyuntura de crisis económica, elecciones parlamentarias y desgaste político de la Concertación, el Gobierno busca sacar de su agenda el tema de las violaciones a los Derechos Humanos, lo cual le permitiría asumir una conducción más firme (el “timón” de Lagos) y retomar la iniciativa política sobre todo frente a la derecha, en el marco de las disputas al interior del poder. Sin embargo, este es un contexto en que las diversas instancias del pueblo organizado también pueden posicionarse, levantando un contenido y práctica que permita fortalecer la propia acción política y la organización de los pobres, los explotados, y en general todos los que ven sus derechos atropellados por el neoliberalismo y la falsa democracia imperante.

Al cumplirse 28 años del golpe militar y el inicio de una de las más salvajes dictaduras que Latinoamérica ha conocido en su historia, podemos constatar que en el plano político (constitución del 80), económico y social (neoliberalismo), las distintas facciones políticas del bloque dominante (concertación y derecha) habiendo logrado hace tiempo un consenso en el proyecto general de país que aspiran a conducir, mantienen algunas contradicciones a resolver entre las cuales está el tema de la violación de los derechos humanos por la dictadura, que sigue siendo una “piedra en el zapato” para el Gobierno chileno junto a los sectores políticos que lo representan, como también para la derecha y las Fuerzas Armadas. Para los sectores populares organizados representan una demanda de justicia muy vigente, y que está asociada a las transformaciones de un modelo político y económico excluyente, injusto y represivo, cuyas bases se sostienen en la institucionalidad heredada de la dictadura militar y fortalecida por los tres gobiernos civiles de la Concertación.

Desde la detención de Pinochet en Londres en el año 1998 cambió favorablemente el cuadro político chileno en lo referido a la temática de los Derechos Humanos, reimpulsando la demanda de verdad y justicia a todos los crímenes cometidos por la dictadura, legitimando la lucha resuelta que dieron cientos de miles de hombres y mujeres bajo diversas formas, despertando en el conjunto de la sociedad una memoria histórica que tiene

lecturas diversas e interesadas de acuerdo a las posiciones políticas, sociales y económicas. El hecho irrefutable está en el reconocimiento de la comunidad internacional y nacional de la existencia de sistemáticas violaciones a los Derechos Humanos cometidas por un Estado de carácter Terrorista, que impulsó los cambios estructurales neoliberales. Así como también la existencia de una pseudo democracia basada en una Constitución Política que le asigna a las FFAA el rol de “garantes” de las instituciones políticas.

Este reconocimiento de conciencia en la sociedad de violaciones a los Derechos Humanos, contribuyó a generar un reordenamiento y posicionamiento de los actores sociales frente a la institucionalidad actual, los partidos políticos de derecha y de “centro derecha” que conforman el gobierno concertacionista, lo cual es una preocupación de los que disputan la administración de la institucionalidad como defensores de la misma.

Esta disputa tiene contradicciones no antagónicas porque apuntan al desarrollo de un mismo proyecto político, y porque existe un acuerdo entre los representantes del poder en buscar una salida política para la situación de los Derechos Humanos que beneficie a las FFAA.

### **El papel de la justicia en el ajedrez político**

Para la coalición de Gobierno este ha sido un factor de desgaste por la presión no sólo de la derecha y las FF.AA., sino también la de sectores de base de la Concertación así como muchas organizaciones sociales y populares que favorecen las demandas de justicia. Ello ha llevado al gobierno de Lagos a actuar de manera encubierta frente a estos objetivos, implementando la política de que son los Tribunales de Justicia los responsables de resolver esta temática, aunque abiertamente impulsa mesas de diálogo, llama a la reconciliación, apoyan a los altos mandos de las FFAA, etc. Es decir, intentan lavarse las manos en medio del tránsito hacia la impunidad.

La derecha, que en un principio fue la más perjudicada por este cuadro político de los Derechos Humanos, ha debido distanciarse lentamente de la figura de Pinochet, buscando con ello limpiarse de la responsabilidad política que tiene en el terrorismo de Estado. Este distanciamiento oportunista sin embargo ha recurrido a una fuerte lucha ideológica tendiente a una defensa de la “obra histórica” del modelo económico impuesto ( el fin justifica los medios), realizando llamados a la sociedad por diversas vías para olvidar el pasado y mirar hacia el futuro, sin alterar el orden y la estabilidad institucional, aunque en los hechos beneficie a una ínfima minoría.

Sin embargo el tema de la justicia no sólo refleja la mayor o menor convivencia interna dentro del bloque dominante, sino también la correlación de fuerzas en general entre este y las fuerzas populares.

Los intentos del sector dominante por solucionar este "problema" han sido variados: negociaciones secretas entre civiles y militares, Informe Rettig y la Mesa de Diálogo, y el carácter que en general hacen prevalecer se centra en el hallazgo de los cuerpos de los detenidos desaparecidos y la búsqueda de la responsabilidad criminal, aunque sin castigo real. Esto no sólo ha

perpetuado la impunidad sino que ha desperfilado el carácter político ideológico de esta lucha, es decir la reivindicación ideológica de los caídos. En los 17 años de dictadura hubo fusilados y desaparecidos por el sólo hecho de militar en los partidos de la Unidad Popular o las diversas organizaciones del pueblo; otros cayeron enfrentándose a los aparatos represivos, haciendo uso de su legítimo derecho a la resistencia contra un régimen tiránico.

En este sentido la orientación que le interesaba al gobierno, la Concertación y la derecha, vale decir encontrar los cuerpos para realizar la “cristiana sepultura”, también pretende enterrar la ideología de los compañeros, el pensamiento y práctica política de todos los que cayeron por aspirar y trabajar por construir una sociedad más justa y digna en el marco del socialismo, y en particular aquellos que como dijimos, resistieron y combatieron desde el primer día del golpe, ejemplo que debería nutrir la educación y la cultura popular en estos tiempos de reconstrucción, fortaleciendo frente a la sociedad las razones éticas irrenunciables para la sanción de los criminales, pero sustentándolas en valores humanos esenciales que son los que deberían constituir una verdadera sociedad democrática y participativa, que es la única donde pueden ser respetados los derechos humanos en el más amplio sentido del concepto.

Lo que está claro es que el “borrón y cuenta nueva” que durante años quisieron imponer todos los sectores políticos ligados a la institucionalidad desde la derecha recalcitrante hasta la socialdemocracia, está lejos aún de poder encauzarse por un camino sin tropiezos. El sobreseimiento de Pinochet fue un paso importante, pero son muchos los uniformados en retiro y activos que desfilan por los Tribunales de Justicia, institución que durante largos años actuó como encubridor y cómplice de estos crímenes y que hoy se han visto obligadas a revisar procesos judiciales y reabrir otros, aunque todo en un marco legal que sigue favoreciendo a la impunidad por las leyes de amnistía y los acuerdos de mesas de diálogo entre los administradores del poder, genocidas y sus defensores abiertos o encubiertos.

Se les hace más difícil a los defensores de la dictadura militar justificar tanta crueldad y brutalidad aplicada sistemáticamente contra la oposición política asumida como “enemigo interno”. No resulta fácil argumentar razones que justifiquen detenciones ilegales y asesinatos en medio de la aplicación de torturas demenciales al punto que hasta el día de hoy no aparecen las osamentas de las víctimas. Incluso las propias FFAA se vieron obligadas a reconocer una ínfima parte de la verdad: que muchísimas personas (una cantidad aun hoy desconocida) fueron mutiladas y posteriormente lanzadas al mar, ríos o lagos.

El poder judicial, al sobreseer a Pinochet, se ha cuadrado con la estrategia del bloque dominante, las instituciones funcionan dijo Lagos, de hecho es cierto, con la salvedad de que operan con intereses de clase, tal como ya lo había hecho el Parlamento al aprobar con presteza la ley del secreto para quienes puedan llegar a entregar información sobre los detenidos desaparecidos.

Este es el cuadro político general de los Derechos Humanos que si lo enlazamos con los crecientes problemas económicos y sociales derivados de la implementación del modelo neoliberal en nuestro país, nos muestran que

el poder tiene grietas que deben parchar y neutralizar, porque aunque es lento el proceso de toma de conciencia de los problemas y las causas de los mismos en el conjunto social, hay muestras de reactivación de demandas sociales y rearticulación de diversos sectores populares donde la lucha por la justicia es y seguirá siendo una demanda intransable.

### **La economía sigue castigando a las grandes mayorías**

Todas las frías cifras económicas demuestran no sólo la permanencia sino la profundidad de los nefastos efectos que en la mayoría de la población tienen las políticas neoliberales que la concertación insiste en aplicar. La encuesta Casen (Caracterización Socioeconómica) realizada a fines del año pasado revela que más de un 20 por ciento de la población chilena vive en la pobreza, sin embargo debemos considerar lo siguiente: para el Ministerio de Planificación y Cooperación (Midelplan), autor de este estudio, una persona es pobre si “ su ingreso se sitúa por debajo de un nivel mínimo que le permita satisfacer sus necesidades básicas, e indigente si sus entradas no le permiten satisfacer sus necesidades alimentarias”. (El Mercurio, 29 de junio de 2001)

Para los tecnócratas gubernamentales, la cifra que marca el límite de la pobreza son 40.562 pesos mensuales, es decir, la persona que reciba 41.000 pesos ya no entra en las estadísticas de pobreza . Esto demuestra dos cosas: en primer lugar lo obvio, y es la absoluta falta de voluntad del gobierno para abordar de forma realista el tema de la pobreza al pensar que una persona puede satisfacer sus necesidades básicas con 41 mil pesos mensuales; y en segundo lugar la magnitud real de la pobreza en nuestro país, ya que si ni siquiera el sueldo mínimo alcanza para satisfacer las necesidades básicas en condiciones de continuas alzas de los productos y servicios básicos, podemos concluir que por lo menos la mitad de la población de nuestro país se limita a sobrevivir, y que el concepto de una vida digna es una meta irrealizable en las actuales condiciones.

Esta espiral de pobreza es provocada en buena medida por la sostenida cesantía que ya alcanza al 10% según cifras oficiales, mostrándose como un fenómeno estructural (permanente) del funcionamiento del modelo, el cual procura obtener y mantener sus ganancias aumentando la explotación de la fuerza de trabajo y manteniendo bajos sueldos. Los niveles de pobreza en el país han vuelto a los niveles de hace 30 años, pero al mismo tiempo en los últimos 10 años se dobló el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB), lo cual demuestra que el crecimiento macroeconómico jamás va a generar bienestar, ya que éste va hoy de la mano con la concentración de la propiedad y la riqueza en el país, en que el 20% más rico de la población tiene un ingreso 15,5 veces superior al del 20% más pobre. Dicha cifra indica que Chile ocupa el cuarto lugar en latinoamérica entre los países con mayor injusticia social.

Otro dato es que a pesar de este panorama el sistema financiero chileno (los bancos), terminó este semestre con una utilidad record del 18%, cifra que no se repetía desde 1994 (“Estrategia”, 30 de julio de 2001), ganancia que proviene de la especulación (precio del dólar) y del endeudamiento de gran parte de la población chilena, tanto los particulares como las pequeñas y medianas empresas.

Estas cifras reflejan una realidad que se ha mantenido con mínimas variaciones en todos los gobiernos concertacionistas, una constatación que hoy la mayoría de los chilenos comparte, pero lo que hace la diferencia, lo que raya la cancha en términos de intereses de clase, es la posición con respecto a las causas de esta situación y las probables soluciones a partir de ello, ahí está la esencia del problema, la cual lo sitúa en el trascendental campo de la lucha ideológica.

Los sectores dominantes han convertido este asunto en un campo más de sus mezquinas disputas a condición claro de no tocar un ápice al modelo económico. Para el gobierno y la Concertación es uno de sus principales factores de desgaste -poniéndolos incluso en la perspectiva de perder la presidencia- al no poder resolver una contradicción antagónica de su proyecto, que es la opción de mejorar la situación económica y social a través del crecimiento macroeconómico en el marco de un modelo en que la propiedad de los medios de producción y los servicios se radica principalmente en manos privadas.

Por su parte, los partidos de derecha despliegan todo su arsenal demagógico con miras a ganar las elecciones presidenciales, queriendo demostrar que ellos son los más eficientes administradores del modelo, e incluso el empresariado nacional utiliza esta situación, por ejemplo la del desempleo, como mecanismo de presión para sacar ventajas en el corto plazo en temas como las reformas laborales y tributarias, e intensificar su campaña de propaganda en cuanto a que la solución va por el lado de profundizar las políticas neoliberales, con mayor flexibilización laboral y mayores privatizaciones, como “incentivos” que permitan a los patrones aumentar la contratación de mano de obra.

En los sectores populares se abre paso la certeza de que la causa de fondo de los problemas es el modelo económico, aunque aún falta recorrer un camino, pavimentado principalmente por la lucha reivindicativa, para adoptar una posición política más global y contundente al respecto, lo cual tiene que ver directamente con el problema de la construcción de fuerza social, donde vemos como poco a poco en diversos sectores y territorios se produce un “regreso a la política”, en asumir de manera más decidida las tareas de formación, organización, convergencia y autonomía con respecto al gobierno y sus políticas, un andar lleno de obstáculos y elementos distractivos, como veremos más adelante. Un aspecto importante a reflexionar es que política y economía van de la mano, lo que significa que si hoy impera la injusticia social y la explotación, es porque existe un sistema político que lo permite, es más, está hecho a la medida de lo anterior, por lo tanto no puede haber verdadera democracia sin justicia social, la lucha contra las políticas neoliberales no deben restringirse al campo económico, sino que también competen a la esfera política, institucional y legal.

### **Elecciones Parlamentarias**

En este contexto se instala el escenario electoral, en diciembre se renueva el 50 por ciento del Senado y el 100 por ciento de la Cámara de diputados, siendo la última elección antes de las presidenciales del 2006. Acá vimos otra demostración de cómo y para quién funcionan las instituciones, al aprobar el Parlamento (en tiempo record) el cambio de fecha de las elecciones mediante una ley hecha a medida de la Democracia Cristiana, un

maniobra que hipócritamente los “honorables” justifican con el “derecho que tienen todos los sectores a estar representados en el Parlamento”, argumento que demuestra su falacia cuando los mismos que lo levantan o bien se han negado sistemáticamente a modificar el sistema electoral binominal o bien rasgan vestiduras cuando el Partido Comunista intenta hacer valer ese supuesto derecho.

Estas mezquinas disputas son propias de la política cupular y con “pé minúscula”, y se dan en un momento donde la UDI, experta en demagogia y populismo, ha logrado hegemonía en la derecha con la posibilidad real de poner un hombre de sus filas en la presidencia del país, lo cual no deja indiferentes a los otros actores políticos del sistema, que buscan recuperar o mantener sus cuotas de poder.

Dado el debilitamiento electoral de la Concertación, en su interior surge una contradicción en cuanto a cómo revertir aquello, en concreto qué sector del espectro político habría que “seducir” y atraer para aumentar el caudal de votos, y así unos miran a la llamada “derecha liberal” y otros hacia la izquierda tradicional, opciones que además tienen que ver con la disputa por la hegemonía dentro de la coalición de Gobierno. Este último es el marco en que ocurren situaciones como las reiteradas señales de acercamiento entre sectores de la DC (en cuya directiva hoy están los sectores más reaccionarios) y de Renovación Nacional (partidos que también desea recuperar perfil y protagonismo al interior de la derecha), y también el último acuerdo PS-PC, que no es resultado de la “vocación democrática” del Partido Socialista, sino de una maniobra de este para “salvarse” y obtener mejores resultados electorales a partir de los votos comunistas, logrando el equilibrio de fuerza con la Democracia Cristiana.

Este espectáculo de las cúpulas en medio de graves problemas económicos y sociales, y difundido por todos los medios de comunicación, no hizo más que hacerle el juego al sistema dominante, al darle más argumentos a quienes plantean que la actividad política es únicamente lo que muestran estas dirigencias ambiciosas y oportunistas, o bien que sólo se reduce al tema electoral. Para nosotros, una política comprometida con los intereses populares no puede ni debe reducirse a estos temas de escritorio, la realidad y las necesidades de reconstrucción del movimiento popular son mucho más diversas y complejas, y ninguna de estas se verá resuelta en intentos por conseguir o conservar sillones en una institución como el Parlamento, que ha dado repetidas muestras de ser una entidad de y para una casta, donde el sistema electoral permite que los diputados y senadores se eternicen el sillón reelegiéndose a placer prácticamente por el sólo hecho de ser nominados.

Pero más allá de eso, el tema de fondo es que la representación popular no la concebimos dentro de estas superestructuras, la verdadera representatividad del pueblo estará asegurada en la medida que se potencie la organización, la lucha política y reivindicativa. Nuestra propia elección, por la cual estamos elaborando un nuevo proyecto, es asumir la tarea de reconstruir al movimiento popular en el seno de sus diversos actores o sujetos, donde a partir de claras posturas respecto al modelo económico y la legalidad vigente se pueda generar la fuerza social necesaria para resistir y contener al neoliberalismo, y generar los instrumentos políticos para

proyectar la lucha a escala nacional, construyendo un contrapoder a la institucionalidad dictatorial que hoy impera.

### **Conclusiones y desafíos**

En síntesis, es cierto que con la mesa de diálogo, la impunidad para Pinochet y los violadores de los DDHH las aspiraciones de verdad y justicia han sufrido un revés frente a la poderosa alianza del gobierno, la iglesia y los militares, interesada en satisfacer las exigencias del empresariado y la derecha que una vez más lavan sus responsabilidades con mano ajena. Pero a partir de ello se visualiza cada vez más la necesidad y la posibilidad de conformar un amplio movimiento de oposición y resistencia a las políticas gubernamentales. Porque las violaciones de los derechos humanos no tienen relación solamente con hechos pretéritos y relacionados con el derecho a la vida y a la integridad física y psicológica de las personas. Tienen que ver con el respeto de derechos fundamentales que se ejercen en la vida cotidiana. Según diversas investigaciones realizadas por organismos especializados, Chile es el país donde los trabajadores cumplen jornadas laborales de doce y más horas de trabajo, donde la desigualdad en la distribución de la riqueza es similar a la de los países más pobres, donde la calidad de la salud se sitúa entre los peores del mundo y donde los índices de explotación del trabajo infantil iguala a los de los países más atrasados. La pobreza, la cesantía, la inestabilidad del empleo y la mala calidad de la vida es también un despojo de la dignidad que expone a abusos de todo orden, especialmente en el caso de las mujeres y los niños, y que se expresa en los altos niveles de violencia intrafamiliar que se registran nuestro país.

Por lo tanto, el eje de la lucha contra las violaciones a los derechos humanos no debe sustentarse exclusivamente en preceptos relacionados con crímenes y abusos por parte del Estado ocurridos en el pasado, sino en una lucha política que tenga como objetivo la democracia plena y un modelo de desarrollo económico y social que satisfaga y respete los derechos de los trabajadores y comunidades indígenas de nuestro país. Para el logro de estos objetivos han de confluir las demandas de justicia y verdad con las demandas de justicia social y derechos económicos y sociales básicos para todos. Ciertamente, el Estado dispone de medios considerables para manipular y desvirtuar estas aspiraciones, entregándole a unos reparaciones económicas y morales, sucedáneos de verdad, u ofreciendo una suerte de mascarada de justicia que avanza un paso a condición de poder retroceder tres. O postular para los trabajadores formas de participación en mesas de diálogo con los patrones y entregarles beneficios económicos sustentados en una mayor explotación. Y cuando esto no baste, queda el recurso a la represión policial contra el derecho a manifestar el descontento y el rechazo a las medidas económicas expoliadoras.

No cabe duda que la aplicación de las políticas neoliberales y las insatisfacciones en el ámbito de los derechos humanos concebidos en toda su amplitud y variedad abonan el terreno para el desarrollo de conflictos sociales de alcances insospechados y que, tarde o temprano, aparecerán en toda su magnitud involucrando al conjunto de la sociedad. Día a día crece la urgencia de construir un movimiento para oponerse a la destrucción del medio ambiente por la explotación intensiva de los recursos naturales, las privatizaciones de los servicios básicos, la pérdida de los derechos laborales, previsionales y las limitaciones a la sindicalización de los trabajadores, la

imposición de un seguro de cesantía y de leyes laborales que favorecen a los empresarios.

Estas políticas se profundizarán y se agravarán sus efectos una vez que se implemente el ALCA en el 2005 como está previsto en el acuerdo recientemente firmado por Lagos en la Cumbre de los Presidentes de Canadá. Este tratado de libre comercio ha sido denunciado por las mayorías nacionales en todo el continente, por cuanto acelera los procesos de pérdida de los derechos y libertades más fundamentales de las personas, menoscaba la soberanía y autodeterminación de los pueblos y somete al país a las políticas de las empresas transnacionales, violando por consiguiente los derechos humanos de manera permanente y sistemática. El neoliberalismo propicia además una carrera armamentista y políticas agresivas contra otros pueblos. No deja de ser preocupante, por ejemplo, la progresiva integración de los ejércitos latinoamericanos bajo el mando de los Estados Unidos, orientadas hoy a reprimir la expresión de las justas demandas sociales y económicas de los pueblos latinoamericanos y a consumir la subordinación del continente a los designios económicos y geopolíticos del imperialismo norteamericano. De hecho, justo el día en que el Fondo Monetario Internacional concede al Gobierno Argentino un nuevo crédito de 8 mil millones de dólares, comienza en aquel país el ejercicio militar llamado "Cabañas 2001", que tiene como instructores a 250 militares de EE.UU. y como alumnos a 700 oficiales de Argentina y 50 de Chile, Brasil, Perú, Bolivia, Ecuador, Paraguay y Uruguay.

La lucha por la dignidad y la justicia en términos políticos económicos y sociales ha de extenderse a todo el continente, expresándose en acciones de repudio a la intervención yanqui en nuestros países y en el continente y en la solidaridad activa con la lucha de los pueblos latinoamericanos por sus derechos y soberanía nacional. En este contexto, valoramos y saludamos la reciente visita a nuestro país del Presidente de Venezuela Hugo Chávez, representante del proyecto político Bolivariano, base de un inédito proceso de cambio social y político en su país, que está arraigado en la historia de las luchas populares y libertarias de Venezuela y Latinoamérica en general. Su encuentro e intercambio con diversas organizaciones sociales y políticas chilenas fue sin duda una valiosa experiencia, que fortalece la esperanza y la exigencia de que la unidad y convergencia de las luchas en nuestro continente sea parte insustituible de cada proceso nacional, ya que como el mismo Fidel dijera , *"o nos integramos, o nos desintegran..."* .

Hay un largo camino por recorrer, de resistencia y reorganización del campo popular, que deberá aprender de sus errores y experiencias exitosas. Nosotros seremos parte de ese proceso histórico y nuestro compromiso es aportar con decisión y el mismo coraje que nos mantiene al margen de "numeritos" propios de disputas por la administración del modelo. Será desde los pobres y marginados que nos reorganizaremos bajo un proyecto político que sustente la soberanía, autonomía, democracia y libertad para nuestros pueblos.

*(\*) Fuente: Documento de la revista EL RODRIGUISTA del FPMR, Septiembre 2001*  
*Pte*

---



Información disponible en el sitio ARCHIVO CHILE, Web del Centro Estudios “Miguel Enríquez”, CEME:

<http://www.archivo-chile.com>

Si tienes documentación o información relacionada con este tema u otros del sitio, agradecemos la envíes para publicarla. (Documentos, testimonios, discursos, declaraciones, tesis, relatos caídos, información prensa, actividades de organizaciones sociales, fotos, afiches, grabaciones, etc.) Envía a: [archivochileceme@yahoo.com](mailto:archivochileceme@yahoo.com)

**NOTA:** El portal del CEME es un archivo histórico, social y político básicamente de Chile. No persigue ningún fin de lucro. La versión electrónica de documentos se provee únicamente con fines de información y preferentemente educativo culturales. Cualquier reproducción destinada a otros fines deberá obtener los permisos que correspondan, porque los documentos incluidos en el portal son de propiedad intelectual de sus autores o editores. Los contenidos de cada fuente, son de responsabilidad de sus respectivos autores.

© CEME web productions 2005

